

Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que mediante presentación de fecha 18 de enero de 2022 comparece el señor Sergio Sagredo Escanilla, domiciliado en pasaje Halcón N° 629, comuna de Maipú, quien deduce demanda en contra Corporación Club de La Unión de Santiago y Unión Inmobiliaria S.A., representadas legalmente por el señor Rodrigo Loyola Fénero, todos domiciliados en avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1091, comuna de Santiago.

Manifiesta que ingresó a prestar servicios el 1 de agosto de 1979 con la Corporación Club de la Unión de Santiago, formalmente con la labor "autoservicio", cumpliendo en los hechos labores de garzón, con una remuneración de \$665.083.

Explica que desde el 1 de octubre de 2021 y hasta la fecha de término de la relación laboral, pese que la suspensión del vínculo habría concluido, se le impidió desarrollar sus funciones. Se hizo las consultas respectivas, indicándose por el abogado de su empleador que no se requerían los servicios por esa semana, presentándose nuevamente el 12 de octubre de 2021 con un grupo de trabajadores a las dependencias, siendo informados que no había trabajo, efectuándose la denuncia respectiva ante la Inspección del Trabajo, siendo constado lo expuesto en fiscalización administrativa. Pese a estar a disposición del empleador no ha recibido pago alguno de remuneraciones en los meses de octubre, noviembre y los días de noviembre anteriores al despido, vulnerándose lo dispuesto en el artículo 21 del Código del Trabajo. Asimismo, durante los meses de enero, febrero, marzo y noviembre de 2018 sus cotizaciones no fueron pagadas, pese a ser descontadas de su estipendio, cuestión que también sucedió en los meses de julio y agosto de 2019. En otro orden de ideas, se dejó pagar sus cotizaciones previsionales pese a suscribir pacto de suspensión de relación laboral en los meses que se extienden de marzo a diciembre de 2020, enero, abril, mayo, octubre, noviembre y 16 días de diciembre de 2021.

En cuanto a la calidad de unidad económica de las demandadas



refiere que en principio el patrimonio de la Corporación Club de la Unión lo integraba el terreno y edificio y ubicado en calle Bandera con avenida Bernardo O'Higgins y los muebles que están en su interior. Con fecha 30 de octubre de 1946 se constituyó Unión Inmobiliaria S.A., cuyo objeto es poseer, adquirir y comprar toda clases de bienes inmuebles y muebles, ejecutar en los inmuebles construcciones, mejoras y transformaciones que el directorio estime pertinente, dar y tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles, y explotar por cuenta propia o ajena los bienes que adquiriera o toma en arrendamiento, lo que se realizó con la finalidad de proteger el patrimonio de la corporación. La referida sociedad está compuesta por 4.500 acciones, de las cuales 4.495 pertenecen a la Corporación Club de la Unión de Santiago, acciones que adquirió en parte mediante la transferencia del inmueble ya individualizado.

Asimismo, el 20 de noviembre de 1997 Unión Inmobiliaria S.A. entrega en comodato el inmueble y todos los muebles que lo guarnecen a la Corporación Club de la Unión de Santiago, manteniendo para efectos de uso de la comodante las dependencias que se indican en el cuarto piso del referido inmueble.

Entiende que por lo expuesto existe una vinculación funcional entre ambas demandadas, siendo la corporación controladora de la sociedad, coexistiendo, donde la sociedad anónima administra los bienes que explota la corporación. Por lo demás, presentan similitud y complementariedad, ya que la sociedad la única actividad que desarrolla es la relacionada con el comodato y administración de los bienes, actuando como mero instrumento de la corporación, lo que se encuentra reafirmado en la letra c) de la cláusula cuarta de los estatutos de Unión Inmobiliaria S.A.

Por lo demás registran el mismo domicilio, controlador común, debido la participación mayoritaria de la corporación, teniendo participación el directorio de ambos los señores Enrique Galleguillos, José Lira Ovalle y Hernando Morales.

Continúa su relato señalando que tienen la misma imagen corporativa, exhibiéndose en la página web www.clubdelaunion.cl el inmueble propiedad de Unión Inmobiliaria, presentándose el directorio de



la corporación y sus memorias.

También existe una dirección laboral común, prestando los garzones y el resto de los trabajadores de la corporación servicios a las actividades de la inmobiliaria, relacionándose con el gerente general común, el señor Loyola Fénero.

Agrega, que existen un financiamiento común, encontrándose todas las actividades subordinadas a las determinaciones e intereses de la corporación, siendo la sociedad quien financia los gastos de aquella, reconociéndose en las memorias y balances.

Sostiene que también están coordinadas por una autoridad común que los organiza y los haga funcionar de manera conjunta, siendo el gerente general de ambas el señor Loyola Fénero, siendo el directorio de la Corporación Club de la Unión quien desarrolla la coordinación general, funcionando en el mismo espacio físico y tienen personal que presta servicios a ambas.

Expone que entre ambas empresas existe un contrato de comodato que favorece a la corporación, quien recibe sin costo y gravamen el uso del inmueble y si bien en principio se pactó un arriendo debido a motivos de índole tributario se optó por la figura de comodato.

Esgrime que las demandadas han incurrido en la figura del subterfugio, encontrándose la corporación en mora de pago de cotizaciones previsionales de sus trabajadores, siendo presionados señalando que la corporación está quebrada y que no tendría manera de responder ante los trabajadores, que se encuentran en indefensión y que deberían renunciar.

Previos fundamentos de derecho y citas legales pide que se declare:

- 1.- La existencia de empleador único entre las demandadas.
- 2.- Que la alteración de la individualidad del empleador se debe a un subterfugio, por lo que deben ser sancionados con la multa prevista en el artículo 507 del Código del Trabajo.
- 3.- La existencia de la relación laboral entre el 1 de agosto de 1979 al 17 de diciembre de 2021 con la corporación o su empleador único.
- 4.- Que el auto despido de 17 de diciembre de 2021 es procedente.
- 5.- Que, además, el auto despido es nulo por no enterarse las



cotizaciones de seguridad social.

6.- Se condene a las demandadas al pago de las siguientes prestaciones:

- a) Indemnización sustitutiva de aviso previo, por \$665.083;
- b) Indemnización por años de servicios, por \$27.268.403;
- c) Recargo legal del 50%, por \$13.643.202;
- d) Remuneración de los meses de octubre, noviembre y días de diciembre de 2021, por \$1.684.876 brutos, líquidos \$1.294.460;
- e) Feriado anual y proporcional correspondiente a 3 períodos íntegros, 2019, 2020 y 2021, por 63 días, esto es, \$1.369.674;
- f) Cotizaciones de seguridad social por los períodos indicados y las que se devenguen por aplicación de la sanción contemplada en los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código Laboral;
- g) Remuneraciones desde la fecha del despido hasta su convalidación en razón de lo dispuesto en los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

Todo con reajustes, intereses y costas.

Segundo: Que comparece el señor Diego Ibáñez Bruron, abogado, en representación de Corporación Club de la Unión solicitando el rechazo, con costas de la acción promovida.

Reconoce la existencia de la relación laboral fecha de inicio, labores y remuneración.

Refiere que es un hecho público y notorio que desde octubre de 2022 y marzo de 2020 han sucedido en el país eventos que han afectado el funcionamiento de su parte y empresas del país , primero los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019 y luego la pandemia, lo que ha provocado la cancelación de eventos y almuerzos, siendo sus principales fuentes de ingreso, haciéndose esfuerzo para dar cumplimiento a sus obligaciones, tratándose de pagar la mayor cantidad de la deuda previsional, priorizándose el pago de cotizaciones, impuestos, finiquitos, prestaciones laborales y seguros.

Hace presente, que los años 2020 y 2021 se sostuvieron reuniones con abogados expertos en quiebra, tomándose decisión de continuar con el



funcionamiento del club, teniendo en consideración que otra alternativa perjudicaría a los trabajadores, encontrándonos en una hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor.

Agrega, que en razón de la situación financiera que atravesaba algunos trabajadores iniciaron emprendimientos particulares o comenzaron a prestar servicios a terceros, citándose a los trabajadores para ofrecerles alternativas y en ese contexto algunos trabajadores acordaron condiciones de salida, otros modificación de funciones y otros que continuaron prestando servicios, negándose el trabajador a cualquiera de ellas, teniendo un trabajo en una notaría.

Hace presente, que al día de hoy las cotizaciones de seguridad social se encuentran íntegramente pagadas.

Añade, que el no pago de las cotizaciones no debe equipararse con el retraso en su pago, situación que realmente existió, haciendo presente que su parte ha regularizado la situación, por lo que estos, de no representar perjuicio al trabajador, no es motivo suficiente que justifique el despido indirecto, siendo la sanción de las mismas los intereses, reajustes y multas que debe asumir.

Por otra parte, la ley 21.227 permite incluso pagar con posterioridad las mismas de conformidad a lo previsto en el artículo 28 y, además, la Superintendencia de Seguridad Social, emitió el Dictamen 2055-2020 que determinó una hipótesis de caso fortuito.

En cuanto al pago de las remuneraciones, el legislador y ejecutivo han reconocido las circunstancias especiales que se enfrentan a través del ingreso familiar de emergencia, la posibilidad de suspender el empleo, siendo razonable que tenga problemas de pago en circunstancias que ha estado por 2 años sin percibir ingresos, no pudiendo hacer frente a sus obligaciones inmediatamente de terminada la pandemia y en baja temporada.

Solicita que se impute y compense un total equivalente a 99,21 UF que corresponde a convenios que se suscribieron los días 25 de julio, 12 de noviembre de 2008 y 15 de diciembre de 2015 a través de las cuales, a petición del actor, se anticiparon montos por conceptos de indemnización



por años de servicios, por lo que parte de las indemnizaciones a las que tendría derecho se encontrarían pagadas. En subsidio, pide que se compensen las mismas.

Respecto la unidad económica y subterfugio lo controvierte

Tercero: Que comparece el señor Gonzalo Contreras Muñoz, abogado, en representación de Unión Inmobiliaria S.A., solicitando el rechazo, con costas de la acción promovida.

Controvierte los hechos que sirven de fundamento a la demanda, no teniendo las empresas el mismo domicilio, siendo la dirección de su parte avenida Bernardo O'Higgins N° 1091, piso 4, no existiendo controladores comunes, sin que siquiera figure la corporación demandada dentro de los 12 mayores accionistas de su parte, haciendo presente que la circunstancia de tener un gerente general común por un breve período de tiempo no constituye dirección laboral común, limitándose a compartir un cargo, no diciendo relación con la administración conjunta de las demandadas, sino respecto del órgano de administración, teniendo las empresas objetos, giros y propósitos disímiles, debido que la sociedad tiene por objeto la preservación del patrimonio nacional y la corporación la realización de actividades propias de un club social, no existiendo autoridad conjunta.

Tampoco ha existido intención de disfrazar el patrimonio o disminuir los activos para el incumplimiento de obligaciones laborales o previsionales, sin que tampoco concurren los elementos del mismo.

Sostiene que con fecha 20 de octubre de 1997, en consideración a los altos costos que representaba el mantenimiento de su patrimonio, se celebró con Club de la Unión contrato de comodato, donde ésta actuaría como comodatorio de los bienes propiedad de la inmobiliaria a cambio de mantenimiento y conservación de sus bienes. Además, la sociedad no ha tenido trabajadores contratados por ella, no existiendo, además, dirección laboral común, no existe una finalidad común, ni decisiones laborales compartidas o coordinación de trabajo.

Cuarto: Que con fecha 18 de marzo de 2022 se llevó a cabo la audiencia preparatoria con la asistencia de las partes al juicio. Se dio traslado de la excepción de compensación, solicitándose el rechazo,



dejándose su resolución para definitiva. Se efectuó el llamado a conciliación, el que no prosperó, fijándose los siguientes hechos pacíficos.

- 1.- Existencia de la relación laboral en su fecha de inicio.
- 2.- Las funciones que realizaba de garzón.
- 3.- Las remuneraciones.

Por su parte, se establecieron las siguientes circunstancias controvertidas:

- 1.- Aquellos que están contenidos en la carta de despido más el cumplimiento de las formalidades legales del mismo.
- 2.- La efectividad de adeudarse las prestaciones demandadas, concepto y monto de cada una de ellas.
- 3.- La efectividad de adeudarse cotizaciones previsionales y de salud, periodos.
- 4.- Efectividad de existir montos a compensar, la procedencia de esta compensación.
- 5.- La efectividad de constituir los demandados un único empleador para efectos laborales, en los términos indicados en el artículo 3 inciso 4 del Código del Trabajo.

Quinto: Que con fechas 1 y 12 de septiembre del año en curso se efectuó la audiencia de juicio con los mismos comparecientes a la audiencia preparatoria, incorporándose los siguientes elementos de convicción por la demandante:

Documental.

- 1.- Balance de la empresa Unión Inmobiliaria S.A. RUT 91.169.000-1 desde enero 2020 a diciembre 2020.
- 2.- Junta Extraordinaria de accionistas de la empresa Unión Inmobiliaria S.A. RUT 91.169.000-1 de fecha 11 de junio de 2020.
- 3.- Memoria y Balance de la empresa Unión Inmobiliaria S.A. correspondiente al año 2019.
- 4.- Memoria y Balance de la empresa Unión Inmobiliaria S.A. correspondiente al año 2020.
- 5.- Planilla con requisitos para incorporarse como socio de la Corporación Club de la Unión de Santiago.



6.- Contrato de comodato entre las demandadas Unión Inmobiliaria S.A. y la Corporación Club de la Unión de Santiago.

7.- Carta de auto despido de fecha 17 de diciembre de 2021 con su respectivo comprobante de envío y oficio remisor.

8.- Certificado de cotizaciones emitido con fecha 07 de diciembre de 2021 por AFP Provida respecto de su afiliado Sr. Sergio Manuel Sagredo Escanilla.

9.- Informe de exposición N° 1301/2021/4071/01/03 de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, la que se infracciona a la demandada Corporación Club de la Unión por no otorgar el trabajo convenido respecto de 8 trabajadores.

10.- Informe de Unidad económica en causa Rit O-6984-2020 del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago por la Inspección Provincial Santiago de la Dirección del Trabajo en contexto de demanda por unidad económica respecto de las dos demandadas de autos.

11.- Reportaje de 5 de marzo de 2022 publicado en página web “interferencia.cl” nominado “Bajo total hermetismo Club de la Unión busca vender escultura de Rebeca Matte”.

Confesional.

Comparece el señor Pedro Toledo en representación de la Corporación Club de la Unión Santiago, quien señaló: que es socio de Club de Unión de Santiago, que es una corporación que trabaja en base a sus socios, tomó la gerencia en el año 2021, también fue gerente de la sociedad inmobiliaria, en marzo de 2022 renunció la inmobiliaria y asumió la gerencia del Club de Unión, siendo gerente general desde ese momento; quien solicitó hacerse cargo fueron múltiples personas que son socios del club; la sociedad inmobiliaria cedió en comodato el inmueble y los bienes que lo guarnecen a la corporación; María Cecilia era una persona que de forma externa se hacía cargo de la unión inmobiliaria, siendo una prestación de servicios externos; más allá del préstamo del espacio físico no existe relación entre las demandadas; la señora María Cecilia trabaja para la corporación y no conoce a que otras partes presta servicios; no sabe quién le informó a ella quien dejaría de prestar servicios; la unión



inmobiliaria nunca ha tenido trabajadores, las funciones administrativas las desarrollan los directores, porque es una sociedad dedicada a la protección del patrimonio que se les entregó; se estableció en el comodato la posibilidad de hacer uso de la sala de reuniones, custodia de carpetas y actas.

Declaró don Eduardo Guerrero en representación de Unión Inmobiliaria S.A. quien señaló: que asumió la gerencia general en el año 2022; la unión inmobiliaria es una sociedad que tiene una función operativa con sus accionistas, no tiene funcionamiento diario de producción, ya que estas se delegan a la corporación, por lo que tiene funciones gerente más operativas o legales y la representación legal; señala que desde que asumió la gerencia la inmobiliaria no tiene trabajadores; la inmobiliaria es la propietaria del inmueble y muebles que guarnecen el inmueble, entregándose un comodato a la corporación de los mismos.

Testimonial.

1° testigo Gonzalo Calvo quien expresó: que era socio del Club de Unión hace 33 años, fue secretario y luego gerente de la inmobiliaria hasta el año 2020; el Club de la Unión tiene 158 años, la sociedad inmobiliaria tiene 47 años aproximadamente y es la dueña del inmueble y muebles que alhajan al club; el directorio de la corporación es un directorio espejo con el de la inmobiliaria, salvo 2 menos, porque la corporación tiene 8 y la sociedad 7; trabajadora Cecilia Sáez era secretaria y contadora, como es una sociedad instrumental sólo ha tenido un solo empleado; Cecilia Sáez mantenía relación laboral con la corporación y pese a ello desarrollaba labores en la inmobiliaria, veía toda la parte ejecutiva.

Contrainterrogada por la corporación expresó: que existieron contratos con la inmobiliaria pero de forma consensuales; entiende que las demandadas están relacionadas e incluso se ha procedido pagar pasivo del Club de la Unión.

Contrainterrogado por la inmobiliaria expuso: la venta de activos le consta por noticias que vio en la prensa.

2° testigo Cecilia Sáez: conoce a las demandadas, las conoce porque trabaja para las empresas, para la Unión Inmobiliaria la sacaron pero



trabajó hace 40 años, fue contadora y vio la parte administrativa del Club de la Unión; en la corporación era ejecutiva de atención de socios; dentro de los requisitos para ser socio de número del club de la unión dependen de la edad, se les pide una cuota de incorporación y también socios patrocinadores, los socios de número se le pide tener dos acciones de la unión inmobiliaria S.A.; quien gestionaba la venta de las acciones era la testigo; su empleador era el Club de la Unión, recibía instrucciones del presidente del Club de la Unión, antes de ello de los presidentes de la unión inmobiliaria y de los gerentes, en ocasiones el gerente era el mismo; existieron problemas entre los directorios del club de la unión y la corporación debido que se querían vender activos; las decisiones se toman por la Corporación del Club de la Unión; el señor Pedro Toledo es el administrador del Club de la unión hasta mayo de este año gerente de la inmobiliaria, y realiza el trabajo administrativo de la misma; señala que recibía una remuneración mensual y boletas de honorarios de la inmobiliaria.

Contrainterrogada por el Club de la Unión expresó: insiste en que aquellas decisiones importantes que afectan a ambas demandadas las toma el directorio de la corporación; que la renuncia del directorio de la inmobiliaria fue decisión de los mismos, debido a la negativa de querer vender activo por la corporación; se han querido vender activos para solucionar el pasivo de la corporación, pero no se aprobó; el señor Sagredo ha prestado servicios para un socio del club, sabe que presta servicios a un socio que tiene una notaría; después de la suspensión laboral ha escuchado que el trabajador está prestando servicios en una Notaria no sabe si es un “pituto” o de forma permanente; el actor pertenecía al sindicato N° 1, siendo el presidente el señor Efraín Alcaya.

3° testigo, Efraín Alcayaga que sostuvo: que conoce al demandante desde el trabajo, era garzón del club de la unión, el testigo era bibliotecario ,a la Unión Inmobiliaria también la conoce, tienen los mismos directores, conoce a la señora Cecilia Sáez, que es secretaria de ambas también; refiere que la relación con la corporación terminó en diciembre de 2021, se autodespidió debido que no se estaba cumpliendo con el trabajo



convenido; después de la suspensión de la relación laboral se habló con el abogado de la Corporación para volver, se les pidió esperar 1 semana sin respuesta por lo que se habló nuevamente y fue un grupo de personas a la corporación, indicándoles que no había trabajo para ser otorgado dejando constancia de ello en el registro de asistencia y se dejó constancia en sede administrativa; las demandadas están relacionadas ambas funcionan en el mismo sitio y lugar, siendo las mismas personas quienes la dirigen, tienen un empleado en común la señora Cecilia, lo que le consta porque la vio realizar gestiones para la inmobiliaria.

Contrainterrogada por Club de la Unión: no recuerdo participar en reuniones con representante de la corporación y estuvo presente en una reunión con otro trabajador; no sabe si el demandante ha prestado servicios para otro empleador en el último año, sabe que está trabajando, pero no desde cuándo.

4° testigo Carlos Riquelme, quien indicó: que conoce al demandante fueron compañeros de trabajo hace 46 años; conoce a la corporación porque trabajó en el Club de la Unión hace aproximadamente 50 años; el día 12 de octubre de 2021 con sus compañeros se presentaron a trabajar, negándosele el ingreso por portería señalando que era por órdenes directas por lo que dejaron constancia en la Inspección del Trabajo y en el libro de registro de los trabajadores que fueron.

Contrainterrogado por Club de la Unión indicó: que el demandante asistió.

Oficios.

- 1.- Inspección Comunal del Trabajo de Santiago.
- 2.- AFP Provida.

Exhibición de documentos.

1.- Contrato y anexos suscritos durante la relación laboral entre el demandante Sergio Manuel Sagredo Escanilla y la demandada Corporación Club de la Unión de Santiago.

2.- Liquidaciones de sueldo de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 del demandante Sergio Manuel Sagredo Escanilla.

3.- Libro de remuneraciones de las demandadas Corporación Club de



la Unión de Santiago, respecto de los periodos enero 2020 a diciembre 2021.

4.- Balances respecto al año 2021 de las demandadas Corporación Club de la Unión de Santiago.

La parte demandante dio por cumplida la exhibición.

Quinto: Que Corporación Club de la Unión de Santiago agregó los siguientes antecedentes probatorios:

Documental.

1.- Certificado de pago de cotizaciones de fecha 11 de marzo de 2022, emitido por PREVIRED.

2.- Certificado de AFP PROVIDA de fecha 11 de marzo de 2022.

3.- Comprobante de transferencia a Empresa de Cobranza COLECTRÓN S.A. de fecha 11 de marzo de 2022.

4.- Liquidación Provisoria 699254 emitida por Empresa COLECTRÓN S.A. de fecha 11 de marzo de 2022.

5.- Comprobante de feriado de fecha 29 de enero de 2020.

6.- Contrato de trabajo de fecha 1º de abril de 1980.

7.- Convenios de anticipos de indemnización de fechas 25 de julio de 2008, 12 de noviembre de 2008 y 15 de diciembre de 2015.

Confesional.

Declaró el demandante, quien señaló: que el señor Carlos Quezada Moreno es un socio del club que atendió hace más de 20 años; una vez lo llamó para ofrecerle ayuda y trabajar con él, a lo que respondió que no sabía porque estaba esperando que lo llamaran del club; actualmente está trabajando con él en una notaría, está trabajado con él desde después del auto despido; su jornada de trabajo era de 9:30 a 17:30 horas.

Oficios.

- AFP Provida.

Sexto: Que, finalmente, la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. introdujo los siguientes medios de prueba:

Documental.

1.- Copia de escritura pública de fecha 30 de octubre de 1946 otorgada en la notaría de don Javier Echeverría.



2.- Copia de inscripción de fojas 675 número 449 del Registro de Comercio de Santiago del año 1947 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

3.- Copia de escritura pública de fecha 10 de febrero de 1983 otorgada en la notaría de Demetrio Gutiérrez.

4.- Copia de escritura pública de fecha 29 de agosto de 1983 otorgada en la notaría de Demetrio Gutiérrez.

5.- Copia de escritura pública de fecha 06 de septiembre de 1983 otorgada en la notaría de Demetrio Gutiérrez.

6.- Copia de escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2007 otorgada en la notaría de don Pedro Sadá.

7.- Copia de escritura pública de fecha 19 de julio de 2012 otorgada en la notaría de don Pedro Sadá.

8.- Copia de Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 4 de junio de 2009.

9.- Copia de Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 11 de junio de 2012.

10.- Copia de Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 06 de junio de 2013.

11.- Copia de Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 28 de mayo de 2015.

12.- Copia de Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 27 de abril de 2017.

13.- Copia de Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 11 de junio de 2020.

14.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 15 de enero de 2003.

15.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 12 de mayo de 2003.

16.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 24 de marzo de 2004.

17.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 01 de abril de 2004.



18.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 06 de mayo de 2004.

19.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 10 de junio de 2004.

20.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 22 de junio de 2006.

21.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 18 de octubre de 2007.

22.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de 23 de octubre de 2007.

23.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de 15 de noviembre de 2007.

24.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de 15 de mayo de 2008.

25.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de 22 de diciembre de 2009.

26.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de 27 de abril de 2010.

27.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de 25 de junio de 2012.

28.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de 29 de octubre de 2012.

29.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de 18 de diciembre de 2013.

30.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de 26 de junio de 2014.

31.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de 24 de julio de 2017.

32.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de 18 de junio de 2019.

33.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de 29 de octubre de 2019.

34.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión



Inmobiliaria S.A. de 17 de marzo de 2020.

35.- Copia de Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de 12 de junio de 2020.

36.- Copia de carta dirigida al Presidente del Club de la Unión don Miguel Zegers Vial por el presidente del Directorio de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. de fecha 29 de octubre de 2019.

37.- Copia de Registro de Accionistas de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A.

38.- Copia de balance de la sociedad unión Inmobiliaria SA por el período 2018.

39.- Copia de balance de la sociedad unión Inmobiliaria SA por el período 2019.

40.- Copia de balance de la sociedad unión Inmobiliaria SA por el período comprendido desde enero de 2020 hasta el mes de septiembre de 2020.

Oficios.

1.- Bolsa de Comercio de Santiago, para que informe de los accionistas registrados de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A. con la indicación de la cantidad de acciones de cada uno y su debida individualización.

2.- Dirección del Trabajo para que informe de la historia laboral que consta de sus registros de la sociedad Unión Inmobiliaria S.A.

Séptimo: Que los hechos pacíficos fijados por el tribunal y la prueba incorporada por las partes, analizada de conformidad a las reglas de la sana crítica, permiten concluir:

1.- La existencia de la relación laboral entre en el actor y Corporación Club de la Unión Santiago desde el 1 de agosto de 1979, circunstancia pacífica entre las partes.

2.- Que el actor a la fecha de término de la relación laboral desarrollaba labores como garzón, asunto en que las partes también están contestes.

3.- Que la remuneración del actor ascendía a la suma de \$665.083, cuestión en la que no existe controversia.



4.- Que el actor puso término a la relación laboral haciendo uso de la figura del despido indirecto con fecha 17 de diciembre de 2021, invocando la causal contemplada en el N° 7 del artículo 160 del código del Trabajo, cumpliendo con las formalidades legales, lo que se concluye del formulario de admisión de envíos emitido por Correos de Chile que da cuenta del envío de la misiva al domicilio consignado en el contrato y contemplado en la demanda, el comprobante de envío remitido a la Inspección del Trabajo y la carta de despido, ninguno de ellos objetados por las demandadas.

En ese sentido, deberá desestimarse lo señalado por la corporación empleadora relativa a que el actor habría concluido la relación laboral con anterioridad y que éste se habría ido a trabajar con un tercero en autos en el tiempo intermedio después de la suspensión de la relación laboral y el auto despido, por cuanto no existe prueba que permita sostener dicha circunstancia, ya que si bien el actor reconoce incluso que actualmente presta servicios para él, manifestó que la misma inició después del auto despido. Con todo, aun cuando se estimase que desarrolló labores para él, tampoco es posible estimar por esa sola circunstancia una renuncia tácita a sus labores, desde que la misma no puede ser invocada por el empleador conforme lo dispone el artículo 177 del Código Laboral, no constando por escrito y las formalidades legales establecidas en la referida disposición, sin perjuicio que tampoco podría impedírsele al trabajador la prestación de servicios en la medida que fuera compatible con aquella que tiene con el empleador demandado y, en la especie, dicha circunstancia no fue alegada por la corporación; al contrario, la misma indica que durante ese tiempo no otorgó el trabajo convenido debido a las razones que esgrime en su contestación.

5.- Que el actor estuvo sujeto a suspensión de relación laboral entre los meses de marzo de 2020 a septiembre de 2021, lo que se concluye de lo señalado por el actor en el libelo, lo que constituye una confesión judicial espontánea.

7.- Que Corporación Club de la Unión desde el 1 de octubre al 29 de noviembre de 2021 al menos, no otorgó el trabajo convenido al actor, lo que aparece del informe de exposición de antecedentes emanado de la



fiscalización 1301/2021/4071/01, originados a raíz de la denuncia efectuada por el sindicato, en el que el fiscalizador constató dicha circunstancia, lo que goza de presunción legal de veracidad de conformidad a lo previsto en el artículo 23 del DFL N° 2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 30 de mayo de 1967, no acompañando la empleadora antecedente alguno que permita desvirtuar ello.

8.- Que las cotizaciones previsionales de los meses de enero, febrero, marzo, noviembre de 2018, julio y agosto de 2019 fueron pagadas con fecha 29 de enero de 2022, no existiendo constancia del pago de las imposiciones de salud de ese período, no encontrándose solucionadas las cotizaciones de seguridad social del actor por los períodos que se extienden de marzo de 2020 a marzo de 2021, ni las imposiciones de salud de los meses de abril, junio, julio y agosto de 2021, aserto que se concluye teniendo a la vista los certificados de cotizaciones previsionales allegados en respuesta de oficio y certificado emitido por Previred, agregado por el empleador del demandante.

9.- Que el actor hizo uso entre los meses de febrero y marzo de 2020 del feriado legal devengado en el año 2019, teniendo a esa fecha un saldo pendiente de descanso de 10 días, lo que consta del comprobante de feriado incorporado por la Corporación Club de la Unión no objetado por el trabajador.

10.- Que con fecha 25 de julio y 12 de noviembre de 2008 el actor y la empresa Corporación Club de la Unión suscribieron 2 convenios a través del cual el empleador entregó al trabajador las sumas de \$755.750 y \$496.280 –equivalentes a 36,09 y 23,305 unidades de fomento al momento del pacto, declarando en la misma convención recibir las sumas de dinero indicadas, autorizando el trabajador a imputar dichos montos debidamente reajustadas de cualquier indemnización que a futuro le podría corresponder o, en su caso, de prestaciones laborales en el evento que no tenga derecho a indemnización alguna, lo que se tendrá por cierto de los convenios individualizados.

11.- Que con fecha 15 de diciembre de 2015 trabajador y empleador nuevamente suscriben un pacto en el cual se acuerda que el demandante



recibiría a título de anticipo de indemnización la cantidad de \$1.000.000, pagaderos en 6 cuotas mensuales, la primera el día 16 del mismo mes y año que se celebró la convención, autorizando también descontar dicho monto a cualquier indemnización o prestación laboral a que tuviese derecho el trabajador con ocasión del término de la relación laboral, lo que se tiene por establecido del convenio de mismo año.

12.- Que Corporación Club De La Unión es una persona jurídica cuyos miembros, admitidos según las normas que previenen sus estatutos y el reglamento y con sujeción a ellos reúnen para su solaz o sus negocios y contribuyen, mediante cuotas, a su sostenimiento y desarrollo. Por su parte Unión Inmobiliaria S.A., es una sociedad anónima que fue constituida por un grupo de socios del Club de La Unión y esa misma corporación, teniendo como objetivo principal el preservar el patrimonio de ésta, evitando que ante una eventual disolución de la corporación, ese patrimonio tuviera un destino distinto para el que fue adquirido por ellos, cuestión que se colige del informe de exposición de antecedentes emitido por la Dirección del Trabajo en los autos O-6894-2020 de este tribunal.

13.- Que con fecha 20 de octubre de 1997 las demandadas de autos celebran comodato sobre el inmueble, propiedad de Unión Inmobiliaria S.A., ubicado en avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1091, con frente a calle Bandera, La Bolsa y Nueva York, otorgándosele el uso y goce del mismo y los bienes muebles que lo guarnecen a Corporación Club de la Unión, con la finalidad de destinarlo al funcionamiento y servicio de su sede social y oficinas, estableciéndose como derecho del comodante y obligación del comodatario permitir usar libremente las dependencias del cuarto piso del inmueble que actualmente ocupa como oficina administrativa, los salones, recintos del edificio y demás necesarios para la las reuniones del directorio y la junta de accionistas, lo que aparece del contrato de comodato suscrito entre ellas.

14.- Que para ser socio de la Corporación Club de la Unión resulta necesario poseer dos acciones de Unión Inmobiliaria S.A., lo que se desprende del documento "requisitos para ser socio" de la primera demandada.



15.- Que, si bien, al momento de constituirse Unión Inmobiliaria S.A. Corporación Club de la Unión era socio mayoritaria, no cuenta a la fecha con acciones, lo que aparece del informe de exposición de antecedentes emitido por la entidad fiscalizadora acompañada por el trabajador, como también la respuesta de oficio arribado por la bolsa de comercio.

16.- Que Unión Inmobiliaria S.A. no cuenta con trabajadores, lo que aparece también del informe de exposición de antecedentes emitido por la Dirección del Trabajo.

17.- Que las demandadas tuvieron un mismo representante legal, el señor Guillermo Loyola Fenero, lo que también aparece del mismo informe.

Octavo: Que en primer término corresponde pronunciarse sobre la acción de despido indirecto promovida por el trabajador, la que se fundó, según se lee de la carta de despido indirecto, en la causal contemplada en el N° 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, atribuyéndole al empleador los siguientes incumplimientos:

1.- No otorgamiento del trabajo convenido desde el 1 de octubre de 2020, luego de haber cesado la suspensión de la relación laboral.

2.- No pago de remuneraciones desde esa fecha, pese a estar a disposición del empleador.

3.- No pago de cotizaciones de cotizaciones de seguridad social de los meses de enero, febrero, marzo, noviembre de 2018, julio y agosto de 2019, marzo a diciembre de 2020, enero, abril, mayo, octubre, noviembre y 16 días de diciembre de 2021.

Noveno: Que es un hecho establecido en autos, como se indicó en el numeral octavo del considerando séptimo, que las cotizaciones previsionales anteriores al plazo de suspensión de relación laboral reclamados en la carta de despido indirecto fueron pagadas con fecha 29 de enero de 2022, esto es, con posterioridad al ejercicio por parte del trabajador de la figura del auto despido, sin perjuicio que no consta el pago de las imposiciones de salud de esos períodos. Asimismo, también se demostró que durante los meses de marzo de 2020 a marzo de 2021 el empleador del trabajador no realizó pago alguno de imposiciones de seguridad social y que en los meses de abril, junio, julio y agosto de 2021



no pagó las correspondientes a salud.

Cabe precisar que respecto a la imposición de cesantía no queda claro en los autos que el empleador tuviese la obligación de descontarlo con anterioridad al mes de abril de 2021 –fecha a partir del cual figura enterada por el empleador en el certificado emitido por Previred-. Lo anterior se debe a la fecha de inicio de la relación laboral del trabajador y lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la ley 19.728, norma que dispone la obligación por parte del empleador de enterar la aludida imposición en la medida que el trabajador así lo solicite, no constando en autos que la obligación de enterar esta se haya generado con anterioridad al mes ya señalado.

La sola circunstancia de que el empleador no efectuó el pago íntegro de las cotizaciones de seguridad social durante la vigencia de la relación laboral, pese a ser debidamente descontadas dentro de los plazos que la normativa exige, cuestión que se colige de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3° de la ley 17.332 que establece una presunción de derecho sobre este punto, constituye un incumplimiento a las obligaciones del contrato por parte del empleador que sólo puede calificarse como grave, toda vez que lo expuesto significa que el empleador se apropió de la remuneración de sus trabajadores destinado a solventar sus cotizaciones de seguridad social sin realizarlo, desviándolos a fines no previstos en la normativa, por lo que se estima configurada la causal, siendo inoficioso pronunciarse sobre el resto de los incumplimientos.

Si bien el empleador justifica su conducta en la mala situación económica de la empresa, lo cierto es que ello no es óbice para que la misma de cumplimiento a sus obligaciones laborales, incumplimientos que en parte, por lo demás, son anteriores incluso a los hechos ocurridos al 18 de octubre de 2018 y la pandemia que asoló al país. De estimar que no se encontraba en condiciones de dar cumplimiento a las mismas debió adoptar las medidas pertinentes con las consecuencias laborales que ello genera, no pudiendo pretender el empleador mantener un trabajador con relación laboral vigente sin dar cumplimiento a sus principales obligaciones laborales, más cuando ello implica la retención por parte del empleador de



parte de la remuneración del trabajador.

Respecto al argumento que dice relación que no puede considerarse como un incumplimiento de entidad suficiente que justifique el cese de los servicios en razón que la propia ley dio un plazo para pagar las mismas, el inciso tercero del artículo 3° de la ley 21.227 expresa: “No obstante lo anterior, durante la vigencia de la suspensión producida por el acto o declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero del artículo 1, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las cotizaciones del seguro social de la ley N° 16.744, las que se calcularán sobre el cien por ciento de las prestaciones establecidas en este Título para las cotizaciones de pensión a que se refieren el inciso primero del artículo 17, el inciso tercero del artículo 29 y el artículo 59 del decreto ley N° 3.500, de 1980; y sobre la última remuneración mensual percibida, para el resto de las cotizaciones de seguridad social y salud, y sólo podrá poner término a la relación laboral por aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, respecto de los trabajadores no afectos a los beneficios de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 159, números 1 al 5, del Código del Trabajo. Durante la vigencia de la suspensión antes señalada, el trabajador tendrá derecho a licencia médica por enfermedad o accidente, en ambos casos, de origen común, si corresponde, y a los subsidios por incapacidad laboral derivados de las mismas, conforme a lo dispuesto a las normas que rigen la materia. Asimismo, durante el período de suspensión señalado tendrán cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, se hayan o no pagado las cotizaciones”. La disposición legal transcrita sólo excluye la obligación de pago del empleador respecto de las imposiciones señaladas allí, lo que permite concluir que las imposiciones de salud y cesantía no se encuentran en ella, por lo que resulta irrelevante para efectos de determinar si las imposiciones estaban pagadas la suspensión de la relación laboral sostenida por la empresa, lo que, además, implica que el plazo contemplado en el artículo 28 de la citada disposición opera sólo respecto de aquellas imposiciones que no tenía la obligación de enterar durante la



referida suspensión.

Décimo: Que en razón de lo expuesto el despido indirecto se encuentra ajustado a derecho, razón por lo cual se le adeuda al actor la indemnización sustitutiva de aviso previo por \$665.083 y la indemnización por años de servicios sin tope -42 años- atendido lo dispuesto en el artículo 7° transitorio del Código Laboral. Atendido que el monto calculado por el tribunal es superior al pedido en el libelo se estará a este último, debiéndose, en consecuencia, la cantidad de \$27.268.403, con el incremento legal del 50%, esto es, \$13.634.201.

Undécimo: Que en cuanto a la remuneración solicitada por el tiempo que el empleador no otorgó el trabajo convenido estando el trabajador a disposición de aquél, de conformidad a lo previsto en el inciso segundo del artículo 21 del Código Laboral, se encuentra establecido que en el mes de septiembre de 2021 concluyó la suspensión de la relación laboral del demandante, encontrándose a disposición de la corporación desde el día 1 de octubre de 2021, según se consignó por la entidad fiscalizadora respectiva, debiendo necesariamente retribuirse la misma, debido que la no prestación de servicios por el período que media desde la fecha indicada y la fecha del auto despido no obedece a una causa imputable al trabajador. Si bien la empleadora expone que el actor en ese período prestó servicios a terceros, lo cierto es que no existe prueba idónea de ello, y si bien el trabajador reconoce ello, manifiesta que ello ocurrió con posterioridad al auto despido. En consecuencia, deberá pagar las remuneraciones desde el 1 de octubre hasta el día del auto despido, lo que asciende a la cantidad de \$1.684.876, monto al que deberán efectuarse las deducciones legales correspondientes, conforme lo dispone el artículo 58 del Código Laboral.

Duodécimo: Que en cuanto al feriado legal pedido, cabe consignar que el trabajador solicita el equivalente a los tres últimos períodos, vale decir aquellos devengados en los años 2019, 2020 y 2021. Del comprobante de feriado legal acompañado por la empleadora aparece que en relación al primer período pedido el actor tenía un saldo pendiente de 10 días, no existiendo constancia de que el trabajador haya hecho uso de los dos últimos períodos o de su compensación, por lo que se hará lugar



parcialmente a lo pedido, adeudándose 53 días, lo que asciende a la cantidad de \$1.174.979.

Décimo tercero: Que respecto a la aplicación de la sanción prevista en el inciso quinto y siguientes del artículo 162 del Código del Trabajo, cabe tener presente que la denominada “nulidad del despido” no constituye, en realidad, una nulidad propiamente dicha, sino una sanción sui generis, de índole pecuniaria, establecida para el caso que el empleador no haya enterado las cotizaciones previsionales del trabajador, sanción consistente en el pago de las remuneraciones en forma íntegra desde el despido hasta la convalidación.

En la especie, el demandado no ha enterado íntegramente las cotizaciones de seguridad social, por lo que deberá aplicarse dicha sanción. En ese sentido debe precisarse que el auto despido es realmente un acción motivada por la voluntad o decisión del empleador de incurrir en los incumplimientos que motivan el término de los servicios, asimilándose a un despido producido por la empresa, por lo que la sanción ya señalada debe ser aplicada.

En consecuencia, el demandado deberá pagar las remuneraciones y demás prestaciones contenidas en el contrato de trabajo desde la fecha del despido hasta su convalidación mediante el pago de las imposiciones adeudadas.

Décimo cuarto: Que existiendo imposiciones impagas se acogerá la acción de cobro de cotizaciones de seguridad social, razón por lo cual se oficiará a las instituciones de seguridad social correspondientes.

Décimo quinto: Que en cuanto a las excepciones de pago y compensación promovidas por Corporación Club de la Unión, cabe señalar que la demandante se opuso en la audiencia preparatoria, arguyendo que los “créditos” que se pretenden hacer valer no tienen la entidad suficientes que los aludidos modos de extinguir las obligaciones opere.

De lo señalado en los numerales 10 y 11 del considerando séptimo aparece que el actor suscribió tres convenios de anticipo de pago de remuneración, en los cuales en dos de ellos –celebrados en el año 2008- se dejó constancia que el actor recibió a su entera satisfacción la suma total



\$1.252.030 –equivalente a 59,14 unidades de fomento- a título de indemnización anticipada, autorizando el trabajador a descontar de cualquier suma que se origine a favor de éste a raíz del término de la relación laboral el monto ya señalado. Otorgándose dicha suma por concepto de indemnización anticipada, constando que la misma fue recibida por el actor en la misma convención, deberá acogerse la excepción de pago en dicho extremo, debiendo descontarse a la indemnización por años de servicios el equivalente en unidades de fomento de la suma pagada, teniendo en consideración el valor de la misma a la fecha del término de la relación laboral, esto es, la cantidad de \$1.827.727, por lo cual el tribunal omitirá pronunciamiento sobre la excepción de compensación en dicho punto.

Respecto al monto que habría sido pagado en el año 2015, el tribunal no dará lugar al mismo, al no constar el pago de la misma, por cuanto en la convención se acordó que la misma se enteraría en cuotas posteriores, respecto de los cuales no existe constancia de su entrega.

Tampoco resulta procedente la compensación solicitada por cuanto la misma para que opere requiere que ambas partes sean recíprocamente acreedores y deudores, situación que no se da en la especie, en primer término por cuanto no se acreditó el pago del anticipo de indemnización del año 2015 y por cuanto, además, se está pidiendo la compensación de una acreencia del trabajador que fue pagado por su empleador de manera anticipada y respecto del cual malamente podría entenderse que ésta tenga respecto de dicha prestación la calidad de acreedora, siendo procedente respecto de ello únicamente la excepción de pago de la misma de acreditarse los presupuestos para que opere.

Décimo sexto: Que, finalmente, corresponde pronunciarse sobre la solicitud de declaración de unidad económica promovida por el actor entre las demandadas de autos.

El inciso tercero del artículo 3° del Código del Trabajo señala: “Para los efectos de la legislación laboral y seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador, para el logro de



fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada”. El inciso cuarto expresa: “Dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para los efectos laborales y previsionales, cuando tengan una dirección laboral común, y concurren a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común”. Por su parte, el inciso quinto indica: “La mera circunstancia de participación en la propiedad de las empresas no configuran por sí sola alguno de los elementos o condiciones señalados en el inciso anterior”. Finalmente, el inciso sexto refiere: “Las empresas que cumplan lo dispuesto en el inciso cuarto serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales o de instrumentos colectivos”.

De las normas transcritas precedentemente se desprende que son requisitos para estimar que existe unidad económica entre las empresas dos: a) dirección laboral común; y b) concurrencia a su respecto de condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común, siendo lo primordial la dirección laboral común, sin perjuicio de la concurrencia del segundo requisito mencionado. La existencia de relación laboral común se dará cuando las prerrogativas o facultades de empleador se realicen en forma compartida o coordinada entre las empresas, no siendo suficiente el solo vínculo propietario, debiendo existir una potestad de mando laboral con los dependientes de las empresas vinculadas.

Décimo séptimo: Que, a juicio del tribunal, la prueba incorporada en autos no permite establecer la unidad económica alegada por el trabajador. De lo señalado en los números 12 a 17 del considerando séptimo resulta inequívoco la relación civil, comercial que ambas demandadas de autos tienen; sin embargo, lo relevante en la acción ejercida resulta la dirección laboral común entre ambas cuestión que no se da en la especie. Así, la demandada Unión Inmobiliaria no cuenta con trabajadores y si bien la



señora Sáez reconoce haber prestado servicios a la sociedad demandada, cuestión que, por lo demás, es corroborado por el informe emitido por la Dirección del Trabajo en materia de unidad económica agregado por el trabajador, es ella quien reconoce que la prestación de servicios realizada por la misma como contadora no se hizo bajo vínculo de subordinación y dependencia, sino a raíz de un contrato de prestación de servicios que eran pagadas previa emisión de la boleta de honorarios respectiva emitida por la trabajadora, lo que también por cierto dio cuenta el informe de unidad económica, por lo que malamente puede entenderse la dirección laboral común que reclama, aun cuando los mismos tengan al mismo representante legal.

No existiendo unidad económica el tribunal no podrá omitir pronunciamiento sobre la declaración de subterfugio, la que supone necesariamente determinar si la configuración de unidad económica alegada, que no está establecido en estos autos, tiene por objeto eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte del conglomerado.

Décimo octavo: Que el resto de la prueba rendida en autos, analizada de conformidad a las reglas de la sana crítica, en nada altera o modifica lo razonado en los considerandos precedentes.

Décimo noveno: Que no se condena en costas a las demandadas por no ser totalmente vencidas.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos, 1, 3 y siguientes, 7 y siguientes, 21, 63, 162, 163, 171, 172, 425 y siguientes, 453, 454, 507 y siguientes del Código del Trabajo; 1698 del Código Civil, y demás disposiciones legales aplicables, **se declara:**

I.- Que se rechaza la demanda en contra Unión Inmobiliaria S.A.

II.- Que se rechaza la excepción de compensación promovida por Corporación Club de la Unión.

III.- Que se acoge la excepción de pago promovida por Corporación Club de la Unión, sólo en cuanto se declara que a la indemnización por años de servicios ordenada pagar en el considerando décimo deberá descontársele la suma de \$1.827.727.



IV.- Que se acoge la demanda promovida por el señor Sergio Sagredo Escanilla en contra Corporación Club de la Unión, declarándose que el despido indirecto se encuentra ajustado a derecho, debiendo la demandada pagar al demandante las siguientes prestaciones:

- a) \$665.083, por indemnización sustitutiva de aviso previo;
- b) \$27.268.403, por indemnización por años de servicios;
- c) \$13.634.201, por el incremento legal correspondiente;
- d) \$1.684.876, a título de remuneraciones insolutas, previos descuentos legales;
- e) \$1.174.979, por feriados;
- f) Cotizaciones de seguridad social en los términos indicados en el numeral octavo del considerando séptimo;
- g) Remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo desde el 17 de diciembre de 2021 hasta su convalidación mediante el pago de las imposiciones de seguridad social.

V.- Que las sumas indicadas en las letras a), b) y c) del románico precedente se reajustarán y devengarán intereses según lo expresa el artículo 173 del Código del Trabajo; por su parte, las consignadas en las letras d), e) y g) se reajustarán y devengarán intereses según lo consigna el artículo 63 del mismo cuerpo legal.

VI.- Que cada parte pague sus costas.

VII.- Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella dentro de 5° día, en caso contrario certifíquese dicha circunstancia, pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza laboral y Previsional, de esta ciudad.

VIII.- Asimismo, firme la decisión ofíciase a las instituciones de seguridad social para los fines pertinentes.

Regístrese, notifíquese por correo electrónico y archívese en su oportunidad.

RIT O-358-2022.

RUC 22-4-0379693-3.

Dictada por don Mauricio Guajardo Espinoza, juez titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo.



